

derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes, a indemnizar como corresponde los perjuicios y daños que puedan derivarse por esta concesión sobre los derechos que la Administración tenga reconocidos a otros usuarios.

Décima.—Queda prohibido el vertido a los cauces públicos, sus riberas o márgenes de escombros u otros materiales, siendo responsables las concesionarias de cuantos daños puedan producirse por este motivo al dominio público a terceros o a los aprovechamientos inferiores, así como los trabajos que la Administración le ordene para la extracción de los escombros vertidos al cauce durante las obras.

Undécima.—Las concesionarias conservarán las obras en buen estado, no pudiendo efectuar ninguna clase de obra sin dar cuenta a la Comisaría de Aguas del Sur de España, quien la autorizará, si procede, previas las comprobaciones, o cualquier otra causa, y serán responsables de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse a intereses públicos o privados como consecuencia de las obras autorizadas, quedando obligada a su indemnización.

Duodécima.—Esta concesión queda sujeta al pago del canon que en cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, con motivo de las obras de regulación de la corriente del río realizadas por el Estado.

Decimotercera.—Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vigentes o que se dicten en lo sucesivo, relativas a la industria nacional, contrato de trabajo, Seguridad Social y demás de carácter laboral, administrativo o fiscal.

Decimocuarta.—Esta concesión no faculta por sí sola para ejecutar obras en zona de servidumbre de carreteras, ferrocarriles, vías pecuarias y canales del Estado, por lo que las concesionarias habrán de obtener para ello, en su caso, la necesaria autorización de los Organismos competentes.

Decimoquinta.—El depósito constituido quedará como fianza a responder del cumplimiento de estas condiciones y será devuelto después de ser probada el acta de reconocimiento final de las obras.

Decimosexta.—Caducará esta concesión por incumplimiento de estas condiciones y en los casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose aquélla según los trámites señalados en la Ley y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que se hace público en cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Madrid, 4 de marzo de 1982.—El Director general, P. D., el Comisario central de Aguas, Enrique Carrasco Gadea.

13084

RESOLUCION de 4 de marzo de 1982, de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que se hace pública la autorización otorgada al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario para construir dos puentes sobre el río Escalote, en los términos municipales de Casillas de Berlanga y Ciruela (Soria).

El Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, ha solicitado la autorización para construir dos puentes sobre el río Escalote, en los términos municipales de Casillas de Berlanga y Ciruela (Soria), para dar paso a caminos rurales, y

Este Ministerio ha resuelto autorizar al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Delegación Provincial de Soria), para construir dos puentes sobre el río Escalote, en los términos municipales de Casillas de Berlanga y Ciruela (Soria), con destino a uso público, con sujeción a las siguientes condiciones:

Primera.—Las obras se ajustarán al proyecto que sirve de base al expediente, suscrito en Madrid y julio de 1979, por el Ingeniero de Caminos don Ricardo Segura Graño, con presupuesto de ejecución material de 3.990.477,60 pesetas, en tanto no resulte modificado por las presentes condiciones y se ajustará a la Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón armado de 19 de octubre de 1973 y a los pliegos de condiciones oficiales. Las modificaciones de detalle que se pretendan introducir podrán ser autorizadas u ordenadas por la Comisaría de Aguas del Duero, siempre que tiendan al perfeccionamiento del proyecto y no se alteren las características esenciales de la autorización, lo cual implicaría la tramitación de nuevo expediente.

Segunda.—Las obras comenzarán en el plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de publicación de la autorización en el «Boletín Oficial del Estado» y deberán quedar terminadas en el de un año, contado a partir de la misma fecha.

Tercera.—El replanteo, la inspección y vigilancia de las obras e instalaciones, tanto durante la construcción como durante la explotación de las mismas quedarán a cargo de la Comisaría de Aguas del Duero, siendo de cuenta del Organismo concesionario, las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen, con sujeción a las disposiciones que le sean aplicables y en especial al Decreto número 140 de 4 de febrero de 1960, debiendo darse cuenta a dicha Comisaría de Aguas del principio de los trabajos. Una vez terminados y previo aviso del Organismo concesionario, se procederá a su reconocimiento por el Comisario Jefe de Aguas o Ingeniero en quien delegue, levantándose acta en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, los nombres de los productores españoles que hayan

suministrado los materiales empleados, los resultados de las pruebas de carga efectuadas, sin que pueda hacer uso de las obras, en tanto no sea aprobada el acta por la Dirección General de Obras Hidráulicas.

Cuarta.—Se concede esta autorización dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.

Quinta.—La dirección de las obras recaerá en un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que será designado por el Organismo concesionario, el cual deberá poner en conocimiento de la Comisaría de Aguas del Duero, su nombre y dirección antes del comienzo de las obras.

Sexta.—En ningún tiempo y por ningún concepto podrá establecerse tarifas para la utilización de los puentes. En los accesos de los mismos deberá establecerse carteles de limitación de peso máximo de los vehículos que por él circulen, de acuerdo con sus características.

Séptima.—El Organismo concesionario será responsable de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse a intereses públicos o privados como consecuencia de las obras autorizadas, incluidos los que correspondan al tránsito y al remanso de las aguas que los puentes puedan producir, quedando obligado a su indemnización.

Octava.—El Organismo concesionario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes o que se dicten en lo sucesivo, relativas a la industria nacional, contrato de trabajo, Seguridad Social y demás de carácter laboral, administrativo o fiscal.

Novena.—Queda terminantemente prohibido el vertido de escombros en el cauce afectado así como la colocación de medios auxiliares y otros obstáculos que impidan el libre curso de las aguas, siendo el Organismo concesionario responsable de los daños y perjuicios, que, como consecuencia del incumplimiento de esta condición, pudiera originarse y de su cuenta los trabajos que la Administración ordene llevar a cabo para retirar del cauce los escombros vertidos o los medios auxiliares colocados.

Diez.—El Organismo concesionario deberá cumplimentar las disposiciones vigentes de Pesca Fluvial para la conservación de las especies dulceacuicolas.

Once.—El Organismo concesionario conservará las obras en perfecto estado y queda obligado a mantener en todo tiempo, incluso durante la construcción, el cauce despejado y libre la circulación de las aguas 50 metros aguas arriba y aguas abajo de los puentes.

Doce.—Esta autorización no faculta por sí sola para ejecutar obras de servidumbres de carreteras, caminos o vías pecuarias, por lo cual, el Organismo concesionario habrá de obtener, en su caso, las pertinentes autorizaciones de los Organismos de la Administración competente.

Trece.—Esta autorización podrá ser transferida a terceros, previa tramitación del correspondiente expediente.

Catorce.—Esta autorización se otorga a título precario, quedando obligado el Organismo concesionario a demoler o modificar a su costa las obras, cuando la Administración lo considere conveniente por motivo de interés público, sin derecho a ninguna indemnización, a favor del Organismo concesionario.

Quince.—Caducará esta autorización por incumplimiento de cualquiera de estas condiciones y en los casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose dicha caducidad según los trámites señalados en la Ley y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Madrid, 4 de marzo de 1982.—El Director general, P. D., el Comisario central de Aguas, Enrique Carrasco Gadea.

13085

RESOLUCION de 5 de marzo de 1982, de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que se hace pública la concesión otorgada a favor de doña Dolores Gutiérrez Ruiz y otros, para aprovechar aguas del río Genil, en término municipal de Ecija (Sevilla), con destino a riegos.

Don Antonio y don José Illáñez Gutiérrez han solicitado la concesión de un aprovechamiento de aguas del río Genil, en término municipal de Ecija (Sevilla), con destino a riegos y

Esta Dirección General ha resuelto conceder a doña Dolores Gutiérrez Ruiz, como usufructuaria, y a don Antonio y don José Illáñez Gutiérrez, como nudos propietarios, autorización para derivar un caudal de 29,37 litros por segundo de caudal continuo o su equivalente de 44 litros por segundo en jornada de dieciséis horas, de aguas del río Genil, en término municipal de Ecija (Sevilla), con destino al riego de 49.9506 hectáreas de terreno en finca de su propiedad, denominada «Quiñones», con sujeción a las siguientes condiciones:

Primera.—Las obras se ajustarán al proyecto que ha servido de base a la tramitación de la concesión y que por esta Resolución se aprueba, a efectos concesionales, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Damián Álvarez Salas, visado por el Colegio Oficial con el número 686, en 10 de enero de 1978 y cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 8.649.175 pesetas.

La Comisaría de Aguas del Guadalquivir podrá autorizar pequeñas modificaciones que, sin alterar la esencia de la concesión, tiendan a mejorar el proyecto.

Segunda.—Las obras comenzarán en el plazo de dos meses, a partir de la fecha de publicación de esta autorización en el «Boletín Oficial del Estado» y deberán quedar terminadas en el plazo de quince meses, a partir de la misma fecha.

La puesta en riego de la totalidad de la superficie a regar deberá efectuarse en el plazo máximo de un año, a partir de la terminación de las obras.

Tercera.—La Administración no responde del raudal que se concede y podrá obligar a los concesionarios a la instalación, a su costa, de los dispositivos de control o limitación de caudal de las características que se establezcan.

El Servicio comprobará especialmente que el volumen utilizado por los concesionarios no exceda en ningún caso del que se autoriza, sin que pueda ser superior a los 6.000 metros cúbicos por hectárea realmente regada al año.

De acuerdo con los datos que figuren en el acta de reconocimiento final de las obras se establecerá el tiempo de funcionamiento de los grupos elevadores para derivar los volúmenes concedidos y también la equivalencia entre la potencia consumida y el volumen derivado, que puede sustituir con ventaja, a la instalación del módulo limitador.

Cuarta.—La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones, tanto durante su construcción como en el período de explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la Comisaría de Aguas del Guadalquivir, siendo de cuenta de los concesionarios las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes, debiendo darse cuenta a dicho Organismo del comienzo de los trabajos. Una vez terminados y previo aviso de los concesionarios, se procederá a su reconocimiento por el Comisario Jefe o Ingeniero del Servicio en quien delegue, levantándose acta en la que conste el cumplimiento de estas condiciones y relacionándose en ella las características de la maquinaria instalada en el aprovechamiento, sin que pueda comenzar la explotación antes de probar este acta la Dirección General de Obras Hidráulicas.

Quinta.—Se concede la ocupación de los terrenos de dominio público necesarios para las obras. Las servidumbres legales serán decretadas, en su caso, por la autoridad competente.

Sexta.—El agua que se concede queda adscrita a la tierra, quedando prohibida su enajenación, cesión o arriendo, con independencia de aquella.

Séptima.—La Administración se reserva el derecho a tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de aquella.

Octava.—Esta concesión se otorga por un plazo de noventa y nueve años, a partir de la fecha de aprobación del acta de reconocimiento final, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

Novena.—Queda prohibido el uso de este aprovechamiento durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de octubre de cada año, pudiendo llegar al precintado de la instalación elevadora. Sin embargo, la Comisaría de Aguas del Guadalquivir podrá autorizar algún riego en dicho período de tiempo, en aquellos años en que las disponibilidades hidráulicas resultaren excedentes.

Diez.—Esta concesión queda sujeta al pago del canon que en cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, con motivo de las obras de regulación de la corriente del río, realizadas por el Estado y que proporcionen o suplan las aguas utilizadas en este aprovechamiento, sin que el abono de este canon, ni la propia concesión en sí, otorguen ningún derecho a los concesionarios para intervenir en el régimen de regulación de la cuenca.

Once.—Cuando los terrenos que se pretenden regar queden integrados en los futuros planes estatales sobre distribución del aprovechamiento de las aguas reguladas por el embalse de Iznájar o los planes de regadío de la zona Genil-Cabra o de la Vega de Carmona, pasarán a integrarse aquéllos en la nueva zona regable, quedando sujetos a las nuevas normas económico-administrativas que se dicten con carácter general y sin derecho a indemnización alguna.

Doce.—Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vigentes o que se dicten en lo sucesivo, relativas a la industria nacional, contrato de trabajo, Seguridad Social y demás de carácter laboral, administrativo o fiscal.

Trece.—Los concesionarios quedan obligados a cumplir, tanto en la construcción como en la explotación, las disposiciones de la Ley de Pesca Fluvial para la conservación de las especies.

Catorce.—La autorización para el trabajo en zonas de policía de vías públicas deberá recabarse de la autoridad competente.

Quince.—Los concesionarios serán responsables de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse a intereses públicos o privados, como consecuencia de las obras que se autorizan, quedando obligados a su indemnización y a realizar los trabajos que la Administración le ordene para la extracción de los escombros vertidos al cauce durante las mismas, así como a su conservación en buen estado.

Dieciséis.—El depósito constituido quedará como fianza a responder del cumplimiento de estas condiciones y será devuelto después de ser aprobada el acta de reconocimiento final de las obras.

Diecisiete.—Caducará esta concesión por incumplimiento de cualquiera de estas condiciones y en los casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose la caducidad según los trámites señalados en la Ley y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que se hace público en cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Madrid, 5 de marzo de 1982.—El Director general, P. D., el Comisario central de Aguas, Enrique Carrasco Gadea.

13086

RESOLUCION de 12 de marzo de 1982, de la Dirección General de Carreteras, por la que se publica la relación detallada de todas las incorporaciones de caminos particulares o de servicios al Plan Nacional de Carreteras, y de todas las incorporaciones de carreteras y tramos de las mismas, de las redes provinciales a las estatales y viceversa, en virtud de los acuerdos del Consejo de Ministros adoptados durante el año 1981.

Para cumplir lo dispuesto en el artículo 14, punto 4, del Reglamento General de Carreteras aprobado por Real Decreto 1073/1977, de 8 de febrero, se publica la relación detallada de todas las incorporaciones de caminos particulares o de servicios al Plan Nacional de Carreteras, y de todas las incorporaciones de carreteras y tramos de las mismas, de las redes provinciales o municipales a las estatales y viceversa, en virtud de los acuerdos del Consejo de Ministros adoptados durante el año 1981.

Alicante

Cesión al Ayuntamiento de Monóvar de la carretera A-431, antigua travesía de la población.

Cesión al Ayuntamiento de Benidorm de la carretera estatal A-153, antigua travesía de la CN-332 a su paso por aquella población.

Cesión al Ayuntamiento de Villajoyosa de la carretera A-154, travesía de Villajoyosa.

Cesión al Ayuntamiento de Sax de la carretera A-430, travesía de la localidad.

Cesión al Ayuntamiento de Biar del tramo de la carretera A-232, comprendido entre la intersección con la A-210, punto kilométrico 35,9, y la intersección con la A-204, punto kilométrico 0,0.

Cesión al Ayuntamiento de Pego de la carretera A-134, travesía de Pego.

Cesión al Ayuntamiento de Benidorm del tramo urbano de carretera C-3.318, de Benidorm a Gandía, por Pego, comprendido entre las intersecciones de la misma con las carreteras N-332 y A-153.

Incorporación a la Red Estatal de Carreteras a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de la prolongación de la avenida del Carmen y tramo del vial correspondiente, actualmente a cargo del Ayuntamiento de Cox.

Cesión al Ayuntamiento de Novelda de la carretera A-432, antigua desviación de la travesía de la localidad por la N-330.

Cesión al Ayuntamiento de Cocentaina de la carretera A-230, travesía de la localidad.

Cesión al Ayuntamiento de Villena del tramo de la antigua travesía de la población por la N-330, de Murcia y Alicante, a Francia por Zaragoza, comprendido entre los puntos kilométricos 353,830 (intersección con la C-3.314, de Caravaca a Villena por Yecla) y el 355,0,80 (intersección con el ramal de acceso a la nueva variante).

Cesión al Ayuntamiento de Crevillente de la carretera A-433, travesía de la localidad.

Cesión al Ayuntamiento de Ibi del tramo de la carretera A-231, travesía de la localidad, comprendido entre las intersecciones de la misma con las carreteras A-200 y A-210.

Cesión a la excelentísima Diputación Provincial de Alicante por parte del Ayuntamiento de Calpe de la avenida de los Ejércitos Españoles.

Almería

Cesión al Estado por parte de la excelentísima Diputación Provincial de Almería de la carretera provincial de Garrucha a Pozo del Esparto, comprendido entre las carreteras AL-152, de Garrucha a Turre, y C-3.327, de Vera a Garrucha.

Castellón

Cesión a la excelentísima Diputación Provincial de Castellón de la Plana del camino que enlaza al casco urbano de dicha localidad con el denominado «Collado del Vidre», hoy a cargo del Ayuntamiento de Benafegor.

Cesión al Ayuntamiento de Segorbe de un tramo de la carretera C-224, de Requena a Segorbe, comprendido entre los puntos kilométricos 19,5 al 20,84.

Ciudad Real

Cesión al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan del tramo de la carretera CR-110, de Alcázar de San Juan a Miguel Esteban, comprendido entre sus puntos kilométricos 0,0 al 1,5.